



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Decisión No. 189

Medellín, nueve (09) de agosto de dos mil veintidós (2022).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, procede a proferir la decisión correspondiente dentro de este proceso ejecutivo promovido por **MARÍA EUGENIA VARGAS DE OLAYA** en contra de **JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A., Radicado No. 05001-31-05-007-2021-00330-01.**

A continuación, la Sala conformada en esta oportunidad por los magistrados DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN en razón de impedimento de la doctora SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, y JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES como magistrado ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 049 de discusión de proyectos, adoptó la decisión que se consigna enseguida:

1. ANTECEDENTES

1. Presentó demanda ejecutiva la señora María Eugenia Vargas de Olaya en contra de Johnson y Johnson de Colombia S.A. por la suma de \$838.531.493 por concepto de intereses moratorios sobre el monto de los aportes pensionales declarados como insolutos desde el 16 de diciembre de 2003 y hasta cuando se salde la deuda, por los intereses de mora desde el 01 de septiembre de 2021, y costas del ejecutivo.

2. El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito mediante auto del 10 de septiembre de 2021, rechazó la demanda ejecutiva y ordenó la entrega del título pensional por valor de \$95.938.050; solicitando al apoderado de la

ejecutante proceda a verificar la situación específica del título aludido y si es del caso vuelva a radicar la demanda, con las precisiones a las que pueda o no haber lugar.

3. Contra la decisión anterior, la parte ejecutante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, argumentando que el despacho no podía inventar una causal de rechazo de la demanda y menos prejuzgar el litigio, además, que no podía proponer de oficio una excepción, que solo puede ser invocada por la demanda, solicitando se revoque la decisión.

4. El juzgado de conocimiento no repuso la decisión y concedió el recurso de alzada.

2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Surtido el traslado las partes guardaron silencio.

3. CONSIDERACIONES

Quid Juris. - Es deber de esta colegiatura examinar si el auto de la A-quo, tiene visos de legalidad, para ello se examinará si la causal de rechazo esgrimida o sustento de la providencia está en listadas en las normas pertinentes del estatuto procesal civil.

1.-La norma que regula el tema es la siguiente, ya que en el estatuto procesal laboral y de la seguridad social sobre el rechazo de la demanda nada regula, por lo que hay que acudir al 145 del adjetivo laboral:

"ARTÍCULO 90. ADMISIÓN, INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.

*El juez rechazará la demanda **cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla**. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose.*

Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisile la demanda solo en los siguientes casos:

- 1. Cuando no reúna los requisitos formales.*
- 2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.*
- 3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.*

4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.

5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.

6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.

7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, **so pena de rechazo**. Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza. Los recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó su admisión. La apelación se concederá en el efecto suspensivo y se resolverá de plano.

En todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho término no ha sido notificado el auto respectivo, el término señalado en el artículo 121 para efectos de la pérdida de competencia se computará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda.

Las demandas que sean rechazadas no se tendrán en cuenta como ingresos al juzgado, ni como egresos para efectos de la calificación de desempeño del juez. Semanalmente el juez remitirá a la oficina de reparto una relación de las demandas rechazadas, para su respectiva compensación en el reparto siguiente.

PARÁGRAFO PRIMERO. La existencia de pacto arbitral no da lugar a inadmisión o rechazo de la demanda, pero provocará la terminación del proceso cuando se declare probada la excepción previa respectiva.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando se trate de la causa prevista por el numeral 4 el juez lo remitirá al defensor de incapaces, para que le brinden la asesoría; si esta entidad comprueba que la persona no está en condiciones de sufragar un abogado, le nombrará uno de oficio."

Del texto anterior no es necesario hacer elucubraciones interpretativas de la norma, para llegar a la conclusión que, por disposición legal las causales de rechazo son taxativas: i) cuando carezca de jurisdicción y competencia; ii) cuando esté vencido el término de caducidad para instaurar la acción y iii) cuando vencido el termino de subsanación de la demanda, es decir cinco (5) días, no se proceda a lo ordenado por el juez en este sentido.

En asuntos laborales, esta figura procesal se aplica por remisión del art. 145 del adjetivo laboral y seguridad social, ya que incluso el art. 28 modificado por el art. 15 de la ley 712, nada regula al respecto.

En **síntesis**, la demanda puede ser rechazada por defectos subsanables (rechazo accidental) o por un vicio sustancial o incorregible (rechazo absoluto), como los expuesto, de lo que deviene que por ser el art. 90 del CGP aplicado por integración a estos asuntos laborales, normas de orden público, es de obligatorio cumplimiento por las partes y en especial por los jueces de la república.

En cuanto a lo último expuesto la Sala se servirá transcribir apartes de las consideraciones de la sentencia de la Corte Constitucional T 213 de 2008, que de manera acertada sostuvo lo siguiente:

"7. La fuerza de las leyes procesales y su condición de normas de orden público.

Tradicionalmente, las normas jurídicas según su relación con la voluntad de los particulares han sido clasificadas en **taxativas** y **dispositivas**. Son taxativas, aquellas que obligan en todo caso a los particulares independientemente de su voluntad. Llámese dispositivas, por el contrario, las que pueden dejar de aplicarse, por decisión expresa de los sujetos en una situación jurídica concreta. Así, **respecto de las primeras, no resulta lícito derogarlas ni absoluta, ni relativamente en vista del fin determinado que las partes se propongan alcanzar, porque la obtención de este fin se encuentra cabalmente disciplinado por la norma misma**^[16].

En ese orden, se encuentran dentro de las llamadas normas taxativas, las relativas a los procedimientos, por cuanto su observancia vincula independientemente de la voluntad de los sujetos respecto de los cuáles ésta va a producir efectos.

En efecto, dispone el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil: **"Observancia de las normas procesales.** *Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de ley.*

Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas".

Así mismo, en la Sentencia C-131/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte se refirió al tema de la constitucionalización del derecho procesal así:

" (...) 3. *En ese contexto, el derecho fundamental al debido proceso viene a compendiar todo ese cúmulo de garantías sustanciales y procesales que regulan la actividad jurisdiccional y administrativa orientada a la solución de controversias; garantías enarboladas desde el Estado liberal, consolidadas tras una ardua tensión entre el poder y la libertad, potenciadas por el constitucionalismo y que hoy se orientan a la racionalización del poder estatal en el trámite de los asuntos que se someten a decisión de las autoridades. Por ello, el debido proceso involucra la previa determinación de las reglas de juego que se han de seguir en las actuaciones procesales, garantiza la igualdad ante la ley de quienes se someten a la justicia o a la administración, asegura su imparcialidad y las sustrae de la arbitrariedad.*

Ahora bien, es claro que las garantías que integran el debido proceso, y entre ellas el derecho de defensa, son de estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales o administrativas, pues constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Ello es así por cuanto la concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia, impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante pues a la conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce a ella. (..)"

Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. **Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas.**

2. Caso concreto.

2.1. La parte demandante en ejercicio del derecho constitucional dispuesto en el art. 228 y con fundamento en el art. 306 del CGP, solicitó el cumplimiento de la sentencia contenida en las sentencias SL 912/18 y la adicional SL 1704/18, de la cual se infiere que es el título ejecutivo que sirve para iniciar la acción ejecutiva en procura del cumplimiento de la sentencia ordinaria.

2.2. El A quo, mediante auto de fecha 10-09-2021 decidió no proferir el mandamiento de pago y **rechazo de la demanda**, con el siguiente argumento:

"Lo anterior, por el presunto incumplimiento en el pago de las mismas; No obstante, previo a librar la orden de pago, se procedió por esta dependencia judicial, a indagar en el sistema de consignaciones de títulos judiciales, encontrando que la entidad demandada ya consigno el día 10/09/2019, un valor que puede en principio corresponder al concepto deprecado, mediante título Judicial numero 413230003380579 por valor total de \$95.938.050: Título que se encuentra a disposición para su entrega. Así las cosas, el despacho rechazará la demanda ejecutiva de la referencia y procederá con la entrega del título aludido al apoderado ejecutante, a quien se le solicita respetuosamente que proceda a verificar la situación específica del pago aludido y si es del caso vuelva a radicar la demanda, con las precisiones a las que pueda o no haber lugar, recordando en todo caso que a la fecha se le habían entregado los siguientes títulos"

Al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la providencia examinada, mantuvo incólume el auto con los mismos fundamentos antes aludidos, haciendo otras consideraciones ajenas al debate.

Conclusión.- Al hacerse el estudio del fundamento o razón que tuvo el A-quo para rechazar la demanda, encuentra la Corporación que no se ajustó al procedimiento, ya que acudió a una razón o causa diferentes a las contempladas en el art. 90 del CGP, desbordando y desconociendo de esta forma el derecho fundamental al debido proceso contemplado en el art. 29 de la Carta Política y denegando así mismo el acceso a la justicia, artículo 229 del mismo texto constitucional, por no tener fundamento legal que respalde el rechazo de la demanda; con fundamento en lo expuesto, se revocará la decisión de la A-quo y se ordenará que estudie la petición del actor, que tiene como fundamento un título proveniente de una sentencia judicial, contra la cual, la parte demandada podrá, sí así lo estima, presentar el derecho de defensa que considere pertinente.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: REVOCA la decisión proferida el 10 de septiembre de 2021, por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, y en su lugar se le **ORDENA** al juzgado de conocimiento pronunciarse de fondo sobre la demanda ejecutiva.

SEGUNDA: Sin costas en esta instancia.

Lo decidido se notifica por ESTADOS.

Los magistrados,



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por Estados No. **140**
del 10 de agosto de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>